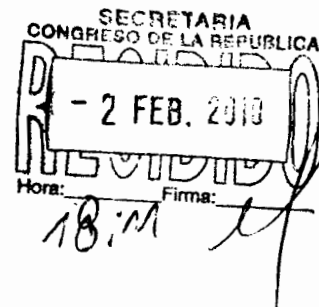




*Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior*



DICTAMEN NUMERO 09-2009

A la Iniciativa de Ley 4073

HONORABLE PLENO

Con fecha 20 de agosto de 2009, el Pleno del Congreso de la República de Guatemala, conoció la Iniciativa de Ley registrada con el número **4073**, presentada por el Organismo Ejecutivo, la cual propone aprobar las **Reformas a los Decretos del Congreso de la República, números 19-2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros y 16-2002, Ley Orgánica del Banco de Guatemala**, y dispuso trasladar dicha iniciativa a la Comisión de Economía y Comercio Exterior, para su estudio y dictamen correspondiente.

I. ANTECEDENTES

Dentro de las iniciativas de modernización y fortalecimiento del sistema financiero nacional, impulsadas en la década de 1990, se incluyó la revisión de las principales leyes financieras, las cuales dieron lugar a la denominada tercera reforma monetaria y financiera, que incluyó la aprobación de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, la Ley de Supervisión Financiera y la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en el año 2002.

Paralelamente se han emitido leyes complementarias a las anteriores, entre las que se pueden citar la Ley de Libre Negociación de Divisas, la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, así como la Ley de Garantías Mobiliarias. Estas leyes han proveído al país de un marco legal que propicia el desarrollo del sistema financiero nacional.

Por su parte, en las reformas relativas a las leyes que regulan la actividad bancaria, con base en las mejores prácticas y estándares internacionales en materia prudencial, se incorporaron aspectos tales como la administración de riesgos en las entidades bancarias, la divulgación y publicación de información, la conformación y funcionamiento de grupos financieros, el seguro de depósitos y un nuevo régimen de resolución de entidades con problemas.

Si bien la Ley de Bancos y Grupos Financieros contempla límites de concentración para operaciones con personas vinculadas, se considera necesario regular de forma más amplia dichos límites y hacerlo extensivo a otras entidades de los grupos financieros. Con lo anterior, se pretende evitar la problemática que han atravesado otros países, tales como República Dominicana, Filipinas y Venezuela, cuyos niveles de operación con partes vinculadas fueron una de las causas de las crisis en sus sistemas financieros.

De otra parte, el tercer pilar del Acuerdo de Convergencia de Capital, conocido como Basilea II, enfatiza que la disciplina de mercado es un factor necesario para el adecuado desarrollo de los sistemas financieros ya que provee a los agentes económicos información relevante y oportuna para que adopten sus decisiones de inversión. En ese sentido, las sanas prácticas internacionales consideran relevante el



000-0075

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

requerimiento de una calificación de riesgo emitida por un ente especializado e imparcial, con el objeto de proporcionar información sobre el riesgo de crédito de las entidades bancarias, que permita al público en general tomar decisiones sobre la base de información comparable.

Respecto al funcionamiento de las entidades fuera de plaza, de conformidad con estudios elaborados por organismos financieros internacionales, se concluye en la necesidad de reforzar las regulaciones prudenciales que le son aplicables, limitar sus facultades para que no operen con depósitos de escasa cuantía y ampliar las causales para revocar la autorización para operar en el país.

Adicionalmente, con el objeto de fortalecer la red de seguridad bancaria, es importante contar con un Fondo para la Protección del Ahorro –FOPA- debidamente capitalizado, razón por la cual se está proponiendo que se incremente dicho fondo a través del establecimiento de cuotas con un componente fijo de 2 por millar y un componente variable de hasta 2 por millar, que deberán cubrir los bancos, tomando como base el promedio mensual de sus obligaciones depositarias.

II. MEJORES PRÁCTICAS A NIVEL INTERNACIONAL

Las reformas propuestas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros y a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala se encuentran fundamentadas en las mejores prácticas internacionales y en las recomendaciones emanadas por organismos internacionales, tales como el Comité de Basilea, la Asociación Internacional de Seguros de Depósitos y el Fondo Monetario Internacional, cada uno de ellos en su materia de competencia.

El Comité de Basilea ha girado recomendaciones en materia de constitución y fusión de entidades bancarias, límites prudenciales, requerimientos patrimoniales y salida ordenada de instituciones bancarias, con el fin de proteger a los ahorrantes y garantizar la estabilidad del sistema financiero.

La Asociación Internacional de Seguros de Depósitos (IADI, por sus siglas en inglés) emitió principios básicos para los sistemas de seguro de depósitos, incluyendo en el principio 11 la recomendación que los mecanismos de financiamiento de los seguros de depósitos se basen en sistemas de primas diferenciadas ajustadas por riesgo, el cual debe ser debidamente comunicado para garantizar la transparencia y fomentar la disciplina de mercado, aspecto que ha sido implementado en las legislaciones de países como Perú, Uruguay, Nicaragua, México, Ecuador y Honduras, en donde exigen una prima diferenciada por riesgo para aportar al seguro de depósito.

En ese sentido, las evaluaciones efectuadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por medio del Programa de Evaluaciones al Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés), toman en consideración el cumplimiento e implementación de estándares internacionales aplicados en el sistema financiero guatemalteco. Sobre el particular, dichos organismos han sugerido reforzar los requisitos de ingreso y los mecanismos de salida de instituciones bancarias, así como fortalecer el fondo para la protección del ahorro para dotar de mayores herramientas al ente supervisor.

III. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA



00000076

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

Las reformas que se proponen a la Ley de Bancos y Grupos Financieros y a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala tienen como objetivo principal hacer más eficiente el marco regulatorio aprobado en el 2002, en cumplimiento de la función del Estado de proteger la formación de capital, el ahorro nacional y la inversión, establecida en el artículo 119, literal k) de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los objetivos específicos se circunscriben a los aspectos siguientes:

1. REFORZAR EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS

- Viabilizar la participación de personas jurídicas, que cotizan en mercados regulados y supervisados, en el capital de bancos nacionales.
- Facilitar mecanismos de mercado para la solución de problemas coyunturales de liquidez.
- Fortalecer el marco regulatorio de las entidades fuera de plaza.
- Mejorar el mecanismo de apoyo a los bancos cuando existan problemas temporales de liquidez.

2. FORTALECER ASPECTOS PRUDENCIALES

- Promover la diversificación del riesgo en el otorgamiento de financiamiento.
- Mejorar los aspectos relacionados con los límites de concentración de créditos.
- Dotar de facultades al ente supervisor para que en casos debidamente justificados pueda limitar la distribución de dividendos.
- Fortalecer el patrimonio computable para que respalde los riesgos que asumen las entidades.
- Dar certeza en la devolución de depósitos a beneficiarios.
- Definir el destino de las cuentas inactivas.

3. PROMOVER LA DISCIPLINA DE MERCADO

- Requerir a los bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza o entidades off shore una calificación de riesgo.
- Proveer mayor información a los agentes económicos para la toma de decisiones.

4. REFORZAR LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN BANCARIA

- Crear otras alternativas para la resolución de bancos con problemas.
- Contar con mecanismos que faciliten la resolución de problemas legales en bancos suspendidos.
- Fortalecer el FOPA como herramienta clave de la red de seguridad bancaria.
- Establecer como aporte al FOPA un componente fijo y un componente variable por riesgo.

IV. JUSTIFICACIONES DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA

AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES



00000077

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

Las buenas prácticas bancarias internacionales recomiendan que para garantizar la estabilidad y la calidad de los participantes de los mercados financieros, se deben establecer requisitos mínimos para el proceso de autorización de nuevas entidades, así como para el adecuado funcionamiento de las entidades bancarias.

Al respecto, los estándares internacionales, con relación a los requisitos de entrada y el funcionamiento de las entidades, entre otros, incluyen: a) evaluar la idoneidad de los nuevos accionistas de entidades supervisadas¹; b) contar con esquemas adecuados de protección de depositantes²; c) disponer de medidas correctivas oportunas o facultades para revocar, cuando sea necesario, la autorización otorgada o conferida a los participantes en el mercado³; y, d) contar con un mecanismo de prestamista de última instancia que facilite recursos para solventar problemas temporales de liquidez⁴.

En atención a lo anterior, el proyecto de reforma incluye, entre otros, lo siguiente:

Modificar el artículo 8 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, relacionado con los procedimientos para la constitución de bancos en Guatemala, en el sentido de exceptuar de la determinación de la identidad de las personas individuales que sean propietarias finales de las acciones, a las personas jurídicas que coticen en bolsa en mercados financieros internacionales regulados y supervisados, por cuya razón no sea posible conocer a los propietarios finales, de manera que esto ya no se constituya en impedimento para la participación de este tipo de capital en el país. Tales personas jurídicas deben estar calificadas por calificadoras reconocidas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (Securities and Exchange Commission –SEC- por sus siglas en inglés).

Con la propuesta anterior, además de permitir la participación de personas jurídicas que coticen en mercados internacionales, se estaría viabilizando la entrada de inversionistas que operan con estándares internacionales.

Modificar el artículo 113 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, relacionado con los requisitos para funcionamiento de las entidades fuera de plaza en Guatemala, con el objeto, entre otros, de que tales entidades no mantengan depósitos menores de US\$10,000 o su equivalente en otra moneda, ni tampoco abran cuentas con montos menores al citado. Además, la reforma aclara que el régimen legal aplicable a los depósitos y otros pasivos en las entidades fuera de plaza, es el del país de origen.

Con estos cambios se estaría promoviendo que las entidades fuera de plaza no operen con depósitos de bajo monto, para reducir su masificación y, con ello, los riesgos para los depositantes menos informados, y que tales depósitos puedan ser trasladados a los bancos constituidos en el país. El otro aspecto a modificar es el relacionado con la advertencia a los depositantes, del régimen legal que aplica

¹ Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva. (2006) Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Principio 3 Criterios para la Autorización.

² Principios Básicos para Sistemas Efectivos de Seguro de Depósito. (2009). Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y Asociación Internacional de Seguros de Depósito. Principios 8 y 9. Membrecía Obligatoria y Cobertura, respectivamente.

³ Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva. (2006) Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Principio 23 Facultades correctivas del Supervisor.

⁴ Orientaciones para la Supervisión de Bancos en Dificultades. (2002) Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Informe del Grupo de Trabajo para el Tratamiento de Bancos en Dificultades.



00000073

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

a los depósitos y otros pasivos, en el sentido de conferirle certeza a los depositantes y acreedores de las entidades fuera de plaza o entidades off shore, respecto a la jurisdicción a donde deben recurrir para el reclamo de sus derechos.

Esta modificación también tiene por objeto que las entidades fuera de plaza o entidades off shore capten recursos únicamente de personas que cuenten con mayor información y conocimiento acerca de las operaciones y funcionamiento de las mismas, de forma que no sean sorprendidas y que no emprendan reclamos al Estado.

Modificar el artículo 114 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, adicionando otras causales para revocar la autorización de funcionamiento de las entidades fuera de plaza o entidades off shore.

Con dicho proyecto de reforma se agregan causales que por su gravedad es recomendable incorporar en el cuerpo de la ley, como por ejemplo, la deficiencia patrimonial mayor al 50% del patrimonio requerido, la presentación de información falsa en su solicitud para operar en Guatemala o ser condenada por delitos de lavado de dinero u otros activos o de financiamiento del terrorismo y otros delitos que ameriten la medida.

Esta disposición provee más herramientas a la autoridad para resolver más ágilmente la situación de entidades con problemas que puedan afectar la estabilidad financiera del país.

Modificar el artículo 48 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, concerniente a la función de prestamista de última instancia, con el objeto de flexibilizar el acceso para los bancos al financiamiento por parte del banco central, únicamente para solventar deficiencias temporales de liquidez.

Con esta reforma se amplía el abanico de garantías aceptables por parte del banco central, en el sentido de extenderlas a títulos valores de alta calidad, se extiende el plazo inicial del crédito de 30 a 60 días y se modifica el criterio para establecer el límite del monto a otorgar, sustituyendo el 50% del patrimonio computable por el 100% de encaje requerido, con lo cual se incrementa el monto del potencial financiamiento.

Por las consideraciones expuestas, se estiman procedentes las reformas propuestas relacionadas con la autorización y funcionamiento de las entidades, ya que favorecerían el desarrollo ordenado y eficiente del mercado, acorde con la naturaleza de las instituciones.

FORTALECER ASPECTOS PRUDENCIALES

Los aspectos prudenciales establecidos mediante la regulación constituyen uno de los pilares que promueven el desarrollo y estabilidad de los sistemas bancarios a nivel internacional. En ese sentido, derivado de la autorización otorgada a entidades de naturaleza bancaria para la captación de recursos del público, se hace necesario que operen dentro de un marco prudencial para mantener la adecuada diversificación de las fuentes de recursos, gestionar en forma efectiva cada uno de sus procesos y mantener niveles de capital y de liquidez suficientes para afrontar los riesgos que asumen, de tal forma que se preserve el ahorro y la inversión.



00000073

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

De otra parte, es responsabilidad de la administración de los bancos y empresas que integran grupos financieros, contar con procesos integrales que garanticen la adecuada administración de sus riesgos, como lo establece el artículo 55 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

En este contexto, las reformas propuestas incluyen: dar certeza en la devolución de los fondos de depósitos en caso de muerte del titular; definir el destino de los fondos de las cuentas de depósitos que han permanecido inactivas; establecer nuevos límites a la concentración de inversiones y contingencias; limitar la distribución de dividendos en casos de entidades que necesiten reforzar su patrimonio; ajustar la estructura del patrimonio computable; y ampliar el alcance de la confidencialidad de operaciones.

En ese sentido, se propone adicionar el artículo 41 bis a efecto que la o las personas que se designan como beneficiarios por el titular de una cuenta de depósito, en caso de muerte de éste, puedan disponer del saldo de la misma de manera expedita, sin necesidad de asumir costos, toda vez que no sería necesario tramitar el proceso sucesorio para ese efecto.

En virtud de lo indicado, es necesario contar con el instrumento legal que defina claramente el derecho de los beneficiarios designados por el titular de la cuenta en caso de muerte de éste, sin que colisione con las normas del derecho civil relativas a la sucesión hereditaria.

También se adiciona el artículo 41 ter con el fin de contemplar la prescripción de las cuentas de depósitos monetarios y de ahorro que no han presentado depósitos o retiros en un período de 10 años y que registran saldos en quetzales menores de un mil quetzales o, en el caso de cuentas en moneda extranjera, que sean menores a ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de América, sobre los que no se tiene certeza de ser reclamados, por lo que es importante que exista una disposición legal que establezca el tratamiento que debe darse a las mismas.

En el caso de las cuentas que tengan pactada una condición que supere el plazo de los diez años, no prescribirán a favor del Fondo para la Protección del Ahorro, para no afectar los derechos expresos de los beneficiarios. En todo caso, el plazo de prescripción empezará a computarse a partir de la fecha en que debe ejecutarse la condición a que se ha hecho referencia.

Según la doctrina, la prescripción constituye un modo de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Es por lo tanto un medio de adquirir derechos o de perder otros adquiridos, obrando el tiempo, como el productor esencial de estas situaciones jurídicas.⁵

De lo expresado se derivan dos clases de prescripción: una para adquirir, también llamada prescripción adquisitiva o usucapión y otra para liberarse, que es la denominada prescripción extintiva o liberatoria.

⁵ Guillermo Cabanellas, **DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL**, Editorial Heliasta, 26ª edición; Argentina: 1998, Tomo VI, página 373.



00000080

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

que es el modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley.⁶

Respecto a esta última, el artículo 1501 del Código Civil contempla que la prescripción extintiva, negativa o liberatoria, ejercitada como acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación, lo que quiere decir que debe hacerse valer dentro de un proceso judicial y que será el juez quien la califique y declare su existencia. En consecuencia, dicha prescripción no opera de pleno derecho y el deudor, a pesar de haber transcurrido el tiempo establecido en la ley, no puede declarar por sí mismo la extinción de la obligación, debe entonces necesariamente acudir ante un órgano jurisdiccional, ya sea promoviéndola o presentándola como un medio de defensa en un juicio de cobro. En caso de materializarse esta figura, la obligación prescribiría a favor de los bancos; sin embargo, en aras del interés social, se estima conveniente regular en el sentido que las cuentas inactivas y sus intereses devengados, prescriban a favor del Fondo para la Protección del Ahorro, toda vez que dicho mecanismo forma parte de la red de seguridad bancaria y, por ende, desempeña una función tutelar del depositante.

Adicionalmente, en el ámbito bancario, existe como antecedente de la prescripción, la prevista en el segundo párrafo del artículo 40 de la extinta Ley de Bancos, Decreto Número 315 del Congreso de la República de Guatemala, el cual indicaba que los depósitos monetarios y los depósitos pagaderos dentro de un término no mayor de 30 días que fueren menores de cinco quetzales, que durante un período de cinco años permanezcan inactivos, prescribirían juntamente con los intereses que hubieren devengado, a favor del Estado.

No obstante lo anterior, al quedar derogada la citada Ley de Bancos, la normativa vigente ya no prevé tal situación, por lo que actualmente, las cuentas permanecen abiertas indefinidamente, a menos que se promueva una acción legal o una excepción de prescripción.

En este orden de ideas, según información proporcionada por los bancos, al 30 de noviembre de 2009, existían 143,617 cuentas inactivas, con saldos menores a un mil quetzales, que representaban un monto de Q15.2 millones, como se presenta en el cuadro siguiente:

BANCOS
Cuentas inactivas con más de 10 años
Al 30 de noviembre de 2009

RANGOS EN Q.	Depósitos Monetarios		Depósitos de Ahorro		Depósitos a Plazo		TOTAL	
	Cuentas	Monto Q	Cuentas	Monto Q	Cuentas	Monto Q	Cuentas	Monto Q
0.01-1000.00	5,680	2,219,846	137,937	12,961,831	-	-	143,617	15,181,676
Más de 1000.01	2,056	7,313,996	4,613	26,928,177	43	353,235	6,712	34,595,407
TOTAL	7,736	9,533,841	142,550	39,890,008	43	353,235	150,329	49,777,084

Considerando lo anterior, la propuesta de reforma contempla que el saldo de estas cuentas y los respectivos intereses devengados sean trasladados al Banco de Guatemala para incrementar el Fondo para la Protección del Ahorro.

⁶ Diccionario de la Real Academia Española. XXII Edición.



00000081

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

En tal virtud se hace necesario promover una reforma a la actual Ley de Bancos y Grupos Financieros para que se contemple la figura jurídica de prescripción en el ámbito bancario en los términos indicados en los párrafos anteriores, y en aras de dotarle dinamismo, la misma deberá operar de pleno derecho, para conferirle certeza jurídica y eliminar cualquier incertidumbre que deje los depósitos vigentes de manera perpetua.

Además, se considera conveniente proponer un artículo transitorio para aquellas cuentas que, a la fecha de entrada en vigencia de esta reforma, tengan acumulados diez o más años de inactividad, puedan interrumpir la prescripción, dando oportunidad a los titulares de ejercer el derecho respectivo, por lo que se fijaría a los bancos un plazo de noventa días para que comuniquen a sus cuentahabientes, por los medios que estimen pertinentes, esta situación y transcurrido dicho plazo se proceda al traslado correspondiente.

De otra parte, se propone modificar el artículo 47 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, relativo a establecer límites para las inversiones y contingencias de los bancos, sociedades financieras, entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas especializadas en servicios financieros que formen parte de un grupo financiero, adaptándose a las mejores prácticas bancarias y los estándares emitidos por el Comité de Basilea. Dicho comité recomienda que los bancos deben contar con sistemas de información gerencial que permitan a la administración identificar concentraciones en sus operaciones, así como una gestión y control adecuado de éstas, de manera que se establezcan límites prudenciales⁷ para sus exposiciones con deudores individuales o con grupos de deudores vinculados.

La práctica internacional también reconoce que la concentración del riesgo puede adoptar muchas formas, dependiendo de la naturaleza y complejidad de los negocios de la entidad, por lo que resulta de suma importancia establecer normas de aplicación general para controlar estos niveles de concentración.

En virtud de lo anterior y derivado de la práctica en nuestro país, es necesario revisar dicho precepto legal principalmente en función del alcance en su aplicación. En ese sentido, la norma actual no define límites para las operaciones que impliquen financiamiento que realicen las empresas especializadas en servicios financieros que formen parte de los grupos financieros autorizados, por lo que se plantea su incorporación con la modificación al citado artículo.

En la práctica se ha observado que el precepto permite varias interpretaciones relacionadas con las unidades de riesgo, por lo que para corregir dicha situación se propone aclarar el concepto como se presenta en el inciso c) del artículo citado, evitando que accionistas y administradores se financien por montos superiores a lo permitido a terceros.

El hecho de establecer límites prudenciales de exposición al riesgo, no debe ser interpretado como una prohibición a las entidades sujetas a dicha disposición para realizar operaciones que impliquen financiamiento. En ese sentido, la ley dispone efectos y consecuencias por asumir riesgos fuera de los límites establecidos.

⁷ Principios Básicos de Supervisión Bancaria (2006), Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, principios básicos 10 y 11, Límites de exposición a grandes riesgos y Posiciones con Partes Vinculadas, respectivamente.



00000082

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

Adicionalmente, como medida prudencial, se propone que las entidades que incurran en excesos a los límites de exposición establecidos, deberán deducirlos de su patrimonio computable, lo que derivará en un ajuste automático de su posición patrimonial para evitar que incrementen indebidamente su margen de expansión. Esta medida será aplicada sin perjuicio de las sanciones que procedan por incumplir los límites definidos por la ley.

Tomando en consideración la adición de nuevos límites prudenciales, el proyecto contempla un periodo de cuatro años a partir de la vigencia de las modificaciones para que las entidades se adecuen a los límites prudenciales definidos.

Asimismo, se propone adicionar que las operaciones con personas vinculadas sean autorizadas por el directorio de los bancos, como máximo responsable de una adecuada gestión de riesgos, que le permita un manejo objetivo del conflicto de intereses.

Adicionar el artículo 49 bis, en el sentido de incorporar la facultad legal de limitar la distribución de dividendos, cuando a juicio de la Superintendencia de Bancos y siguiendo el debido proceso, como medida prudencial, sea necesario fortalecer la liquidez y/o solvencia de la entidad supervisada, para no poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones con los depositantes.

En tal sentido, el término dividendo a que hace referencia el artículo 49 bis, debe entenderse por el componente de la utilidad neta que se aprueba para ser distribuido a los accionistas y se materializará con el pago u otra modalidad que adopte la cobertura de tales dividendos.

Frente al hecho que los bancos manejan mayoritariamente recursos del público, reviste mayor relevancia la participación del Estado para garantizar la protección de tales recursos. En ese sentido, la Superintendencia de Bancos, como medida prudencial, ha emitido recomendaciones a las entidades supervisadas para que limiten la distribución de dividendos a fin de mantenerse solventes para afrontar sin dificultades las épocas de crisis; por lo tanto, es necesario dotarla de las facultades legales específicas para preservar la liquidez y solvencia de las entidades.

Modificar el artículo 65 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, relativo al patrimonio computable con que los bancos respaldan los riesgos asumidos en sus operaciones. Este artículo define la estructura del patrimonio, la cual consiste en la suma del capital primario y capital complementario. De esa cuenta, la estructura del patrimonio computable debe responder a las mejores prácticas con el objeto de contar con un capital regulatorio fortalecido.

El Comité de Basilea ha revisado sus pronunciamientos en materia de capital de instituciones bancarias, incorporando nuevas metodologías para su cálculo, en el que define que el capital primario reúne características de permanencia, aspecto que debe quedar claramente definido en la ley. En el proyecto se propone que a las "otras aportaciones permanentes" que forman parte del capital primario, se le adicione el término "de capital" para que no incluya componentes de deuda, con lo cual se fortalece dicha sección de capital primario. En cuanto al capital complementario, es conveniente facultar a la Junta Monetaria para que, con base en estándares internacionales, pueda adicionar otros componentes



00000083

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

de naturaleza análoga a los descritos en la ley para la determinación del capital complementario y las características de los componentes de dicho capital.

Adicionalmente, el Comité de Basilea⁸ reconoce que los instrumentos de deuda subordinada a plazo, tienen significativas deficiencias como componentes de capital en vista de su vencimiento fijo y de su incapacidad para absorber pérdidas, excepto en una liquidación. Estas deficiencias justifican una restricción adicional sobre el monto elegible de tal deuda para su inclusión en el capital computable. Consecuentemente, se ha concluido que los instrumentos de deuda subordinada a plazo, con un plazo original de vencimiento de más de cinco años, pueden ser incluidos dentro de los elementos de capital complementario, pero hasta un máximo de 50% del capital primario. La restricción comprende, además, que cuando a la deuda subordinada le falten cinco años para su vencimiento, se inicie la aplicación de un factor de descuento acumulativo anual del 20%, a efecto de ajustar gradualmente la posición patrimonial y evitar que a su vencimiento pueda darse un impacto abrupto que provoque deficiencia patrimonial.

A manera de ejemplo, en los últimos 5 años de vigencia de la deuda subordinada, deberá aplicarse el factor de descuento acumulativo anual del 20%. En ese sentido, se ilustra su aplicación en el cuadro siguiente:

Premisas:

Deuda contratada a 10 años plazo

En los últimos 5 años para su vencimiento debe aplicarse un factor de descuento del 20% anual acumulable

Plazo para el vencimiento de la Deuda Subordinada	Porcentaje de deducción para el cómputo de capital	Porcentaje de cómputo en el capital
De más de 5 años	0%	100%
De más de 4 años hasta 5 años	20%	80%
De más de 3 años hasta 4 años	40%	60%
De más de 2 años hasta 3 años	60%	40%
De más de 1 año hasta 2 años	80%	20%
Hasta un año	100%	0%

Además, se propone que las inversiones que realicen los bancos o sociedades financieras en entidades fuera de plaza, casas de bolsa o empresas de apoyo al giro bancario cuando se posea como mínimo el 25% de su capital, se deduzcan del patrimonio computable para evitar el doble apalancamiento que deriva en un debilitamiento patrimonial. La propuesta es consistente con el pronunciamiento del Comité de Basilea conocido como Basilea II⁹.

⁸ Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital (1988). Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Actualización 1998, Anexo I.

⁹ Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital (2006). Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Párrafos 27 y 37.



00000084

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

La deducción de la inversión en las empresas de apoyo al giro bancario se aplicará cuando ésta sea superior al 25% del capital, proporción en la que se presume el control de la entidad.

PROMOVER LA DISCIPLINA DE MERCADO

La disciplina de mercado se entiende como el ambiente en el cual los agentes económicos toman decisiones con base a la información que les proveen los participantes en dicho mercado generada en forma libre, transparente, confiable y oportuna.

Uno de los aspectos que más contribuyen a la transparencia es contar con una calificación de riesgo emitida por una empresa calificadora experta. Dicha calificación se basa en una metodología de evaluación independiente que, entre otros aspectos, comprende el riesgo económico, riesgo de la industria, posición del mercado, manejo y gestión, calidad de activos, liquidez y fondeo, suficiencia de capital, rentabilidad y eficiencia. Esta calificación proporciona al público usuario un indicador simple, integral y comparable que le facilita la interpretación de la categoría de riesgo de la entidad calificada. Las buenas prácticas observadas en esta materia indican que las calificadoras deben estar registradas en un órgano estatal, que la calificación sea divulgada y esté disponible.

Sobre las calificaciones de riesgo, el nuevo acuerdo de Capital de Basilea, conocido como Basilea II, incluye el papel de las calificadoras de riesgo dentro del proceso de medición de riesgos de las entidades. En ese sentido, dicho documento establece las características mínimas que deben tener las empresas que se dediquen a tales actividades. Asimismo, de conformidad con los estándares en materia de empresas de calificación de riesgo, es conveniente que éstas reúnan requisitos de calidad e integridad del proceso, independencia, divulgación y confidencialidad¹⁰ con lo cual puedan atender adecuadamente las necesidades del mercado.

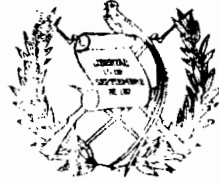
En la reforma se propone el artículo 58 bis con el fin de requerir a los bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza o entidades off shore calificación anual de riesgo emitida por empresas calificadoras reconocidas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América denominada Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), por representantes de éstas o por otras calificadoras de riesgo que cumplan estándares equivalentes. En todos los casos, dichas calificadoras deberán registrarse en la Superintendencia de Bancos

El proponer que la entidad sea reconocida por la SEC, es porque dicha Comisión establece requisitos estrictos, lo que promueve un trabajo serio y profesional.

Es conveniente agregar que el proceso de publicación de la calificación de riesgo se hará de manera ordenada con el objetivo de que su implementación sea gradual y no afecte en forma desfavorable a las entidades calificadas. Para este efecto, se estiman 3 fases, así:

1. En la primera fase se contratará una calificadora de riesgo para entidades supervisadas que no cuenten con una calificación de este tipo. La calificadora presentaría resultados de la calificación.

¹⁰ Principios para las Actividades de las Agencias de Calificación de Crédito. (2003) IOSCO.



00000085

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

únicamente al órgano supervisor y al consejo de administración de la respectiva entidad, para que con base en dichos resultados las entidades inicien la implementación de las acciones que tiendan a fortalecer su desempeño.

2. En la segunda fase se contratará una calificadora de riesgo por parte de cada entidad supervisada calificada según la primera fase, cuyo resultado, se comunicará a los mismos usuarios de la fase previa, para dar seguimiento y evaluar el grado de evolución del desempeño.
3. En la tercera fase, los resultados de la calificación se harían públicos por los medios correspondientes y conforme los plazos que fije la autoridad monetaria.

La propuesta también incluye las características de la calificación de riesgo, dándole énfasis a que la misma constituye una opinión emitida por la empresa calificadora en cuanto a la capacidad financiera en general de la entidad calificada para cumplir con sus obligaciones. En consecuencia dicho juicio experto no debe ser considerado una garantía de que no existe ningún riesgo para el depositante o inversionista. Por tal razón, dicha calificación es un elemento adicional e importante para la decisión de inversión que se vaya a tomar.

REFORZAR LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN BANCARIA

De conformidad con los principios y directrices para la política de resolución de bancos, emitidos por el Comité de Basilea¹¹, los entes supervisores deben velar porque los bancos débiles regularicen sus operaciones, de lo contrario deberán suspenderlos rápidamente y transferir sus activos a otras entidades bancarias. La oportunidad de estas medidas tiende a minimizar los costos eventuales a los depositantes, acreedores y contribuyentes.

La reciente suspensión de operaciones de bancos en Guatemala demostró que el proceso de resolución bancaria establecido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros es efectivo y es consistente con los principios y directrices comentados en el párrafo anterior. Sin embargo, es conveniente realizar ajustes a dicho proceso para incorporarle mejoras derivadas de la experiencia adquirida, así como tomar en cuenta otras prácticas surgidas de la reciente crisis económica y financiera internacional.

En congruencia con lo expuesto, la iniciativa de ley objeto de análisis propone reforzar los mecanismos de resolución bancaria, que incluye el fortalecimiento del Fondo para la Protección del Ahorro y la incorporación como un participante de dicho proceso, de la figura del representante legal.

Esta parte de la reforma se circunscribe a lo siguiente:

- a) Modificar los artículos 78 y 79 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros y adicionar el artículo 84 ter, relacionados con la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, con el objeto de dotar de otras alternativas al proceso de exclusión de activos y pasivos. En ese sentido, la iniciativa

¹¹ Directrices para la supervisión de bancos en dificultades (2002). Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Informe del Grupo de Trabajo para el Tratamiento de Bancos con Dificultades.



00000086

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

plantea adicionar al actual proceso de exclusión de activos y pasivos que se realiza a través de un fideicomiso, la enajenación parcial o total en forma directa a otro u otros bancos, de los activos y pasivos de la entidad suspendida. En la enajenación citada se permite la participación de la banca extranjera bajo la figura de sucursal de banco extranjero que, por su escala, facilitaría la resolución de bancos grandes.

- b) La propuesta adiciona la posibilidad de excluir, en el caso que el valor estimado de los activos así lo permita, importes debitados en cuentas de depósitos o importes recibidos, en ambos casos para la adquisición de cheques de caja o de gerencia, giros del exterior o para transferencias de fondos, así como otras captaciones como lo son los bonos y pagarés financieros, cuya creación y negociación haya sido autorizada por Junta Monetaria y siempre que no sean obligaciones convertibles, subordinadas o de cualquier otro instrumento de deuda con características de capital, para darles tratamiento en la exclusión similar al de los depósitos no garantizados, ya que son de naturaleza equivalente.

Finalmente, la adición del 84 ter establece con claridad la aplicación del proceso de exclusión a las sociedades financieras privadas, para dar certeza jurídica al tratamiento de resolución de éstas.

- c) Introducir nuevas alternativas al proceso de resolución permite ampliar las medidas a disposición de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos en la resolución de un banco, sin la necesidad de constituir un fideicomiso, lo que agiliza el proceso al eliminar pasos, costos, tiempo y esfuerzo en beneficio del depositante. Además, se posibilita la participación de la banca extranjera en la enajenación de activos y la asunción de pasivos.

- d) Adicionar el artículo 79 bis a la Ley de Bancos y Grupos Financieros con el fin de incorporar la figura de representante legal del banco suspendido y sus funciones, las cuales no deben interferir con las de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos.

En la iniciativa se propone crear esta figura para completar las funciones operativas de la entidad bancaria suspendida, tales como concluir los procesos administrativos pendientes de los clientes, tales como: comisión de cartas de pago, certificaciones y otros, que, de otra forma, se verían perjudicados. También tendría a cargo atender otro tipo de obligaciones y de apoyo logístico en tanto se produce la liquidación judicial.

- e) Modificar los artículos 81, 86, 88 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros para ampliar la capitalización y participación del Fondo para la Protección del Ahorro –FOPA-. Actualmente, de conformidad con la Ley de Bancos y Grupos Financieros, las entidades aportan al FOPA una cuota fija mensual equivalente a la doceava parte del 1.5 por millar del promedio mensual del total de las obligaciones depositarias. La Iniciativa de Ley analizada contempla incrementar la cuota fija a 2 por millar más un componente variable que también podrá ser de hasta 2 por millar calculado con base a criterios de riesgo. Ambas cuotas serán aportadas mensualmente por los bancos con base al promedio mensual de la totalidad de las obligaciones depositarias.



000-00087

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

Además, crea un mecanismo más equitativo, al asociar una parte de las cuotas al riesgo asumido por las entidades y estimula la mejora continua en la gestión de riesgo en las entidades supervisadas.

En ese sentido, los Principios Básicos para los Sistemas de Seguro de Depósito Efectivos del Comité de Basilea y la Asociación Internacional de Seguros de Depósito, recomiendan que los seguros de depósito deben estar adecuadamente capitalizados. La propuesta permitirá mejorar la capitalización del FOPA para atender casos futuros de resolución bancaria, ya que la capitalización actual no es suficiente para atender casos como los experimentados en el pasado reciente, si se produjeran.

Al 30 de septiembre de 2006 y 2009, el patrimonio del Fondo para la Protección del Ahorro –FOPA– ascendía a Q1,651.0 millones y Q573.2 millones, respectivamente, como se muestra a continuación:

	Sep-06		Sep-09	
INCREMENTOS	1,651.0	100.0%	2,448.5	100.0%
Aportes de Bancos	255.4	15.5%	627.7	25.6%
Aportes del Estado	1,108.4	67.1%	1,382.0	56.4%
Resultados y Otros	287.2	17.4%	438.8	17.9%
DISMINUCIONES			1,875.3	76.6%
Procesos de resolución	0.0		1,971.9	80.5%
Recuperaciones	0.0		-96.6	-3.9%
PATRIMONIO PROPIO	1,651.0		573.2	

Como se puede observar, el patrimonio del FOPA se ha reducido sensiblemente con relación a la posición que presentaba a septiembre de 2006. Razón por la cual es necesario fortalecerlo.

Por aparte, al asignarle al FOPA la atribución de proporcionar recursos, en efectivo o con otros activos líquidos, a las entidades que asumen los depósitos de una entidad suspendida en un esquema de venta total o parcial, a cambio de cartera crediticia devuelta, estimula la participación de compradores de activos de entidades suspendidas al minimizarles el riesgo en que incurrirían al no contar con tiempo suficiente para efectuar una evaluación que les permita medir adecuadamente la calidad de cartera que se asume, en virtud de que el proceso de resolución supone que debe concretarse en un tiempo corto para garantizar la continuidad del buen funcionamiento del sistema de pagos.

- f) Reformar los artículos 83 y 84, y adicionar el artículo 82 bis, relacionados con la declaratoria de quiebra de la entidad suspendida, la operación y liquidación del fideicomiso.

Las reformas propuestas son necesarias para hacer funcional la alternativa de enajenación de activos y pasivos del proceso de resolución bancaria. Asimismo, con la adición del artículo 82 bis, se aclara la función del Banco de Guatemala, en su calidad de administrador de los recursos del



00000088

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

FOPA, para otorgar, aclarar, ampliar o modificar los instrumentos atinentes a la transmisión de los activos de la entidad suspendida.

- g) Adicionar el artículo 84 bis para viabilizar la resolución bancaria por medio del establecimiento de exenciones fiscales a las operaciones y fideicomisos que se constituyan derivado de la resolución de entidades con problemas. La Iniciativa de Ley propone exenciones del pago al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos y al Impuesto Sobre la Renta.

Cuando se produce una resolución bancaria, el objetivo es proteger a la mayor cantidad de depositantes. En estas circunstancias, usualmente, los activos no alcanzan para cubrir los compromisos. Si a ello se agrega el gravamen impositivo sobre la transferencia de los activos, la operación se vuelve onerosa y poco atractiva para los potenciales adquirentes de activos de la entidad suspendida.

Además, con estas reformas los mecanismos de resolución bancaria se verán fortalecidos, se eliminarán algunos obstáculos y se estimularán soluciones de mercado más ventajosas.

Cabe aclarar que, conforme lo establece el artículo 7, numeral 14, del Decreto Número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado, está exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado la venta de activos de bancos o de sociedades financieras privadas cuando exista un plan de regulación (regularización) aprobado por la Superintendencia de Bancos o cuando exista una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. Sin embargo, sobre la base de la experiencia adquirida, se proponen otras opciones de resolución bancaria para la salida ordenada de bancos o de sociedades financieras, que incluye la enajenación directa de activos y la transferencia directa de pasivos por parte de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos a bancos nacionales o bancos extranjeros, opciones que se están incorporando a la ley en esta reforma, por lo que es conveniente que la exención se haga extensiva a las opciones que contiene dicha reforma para que exista simetría fiscal entre ellas.

De cualquier forma, el Estado no sufriría menoscabo en su patrimonio porque actualmente no se produce este tipo de operaciones, precisamente por el gravamen, y si por efecto de la exención fiscal se estimulan, tampoco habría afectación patrimonial del Estado porque lo que no percibe en ingreso fiscal, lo ahorra por el lado de no tener que financiar al FOPA para atender resoluciones bancarias, que se resolverían por la vía de mercado.

De otra parte, la propuesta de exención del pago del Impuesto Sobre la Renta a los fideicomisos constituidos para efectos de la transmisión de los activos excluidos de una entidad suspendida, tiene por objeto hacer congruente las medidas adoptadas para reforzar el mecanismo de la salida ordenada de entidades financieras. Asimismo, cabe resaltar que este fideicomiso se constituye con fines eminentemente de protección de la colectividad, no así para resguardar o por convenir a intereses individuales. Además, también le son aplicables los argumentos del párrafo anterior, razón que justifica la exención de mérito.



00000089

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

En la propuesta se reforma el artículo 11, que se refiere a las fusiones de bancos o de sociedades financieras, se elimina el término absorción dejando solamente fusión, ya que aquel término constituye una variante limitada de éste, por lo que no es conveniente mantener la redacción de esa forma. Adicionalmente, en dicho artículo se contempla una modificación de carácter tributario, en el sentido de establecer exención del Impuesto al Valor Agregado en la venta, cesión o cualquier otra forma de enajenación de cartera de créditos, así como del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos para los documentos y contratos en los cuales se formalice.

En ese orden de ideas, la propuesta de exención permitirá que al no existir encarecimiento de la transacción, se estimula la aplicación de soluciones de mercado para resolver problemas de liquidez y solvencia de las entidades, acciones que actualmente no se realizan por los sobre costos fiscales de la transacción. Debido a la dificultad que se puede dar de no llevar a cabo estas soluciones de mercado, se incrementa la necesidad de la participación del Estado en la resolución de bancos y de sociedades financieras.

Asimismo, la reforma al artículo 11 establece exención del Impuesto al Valor Agregado -IVA- en la adjudicación de bienes a favor de un banco o de una sociedad financiera. Las entidades bancarias, como consumidores finales, no registran crédito fiscal por IVA; consecuentemente, tienen que absorber los impuestos. En el caso de los activos extraordinarios, éstos son bienes que los bancos deben de venderlos dentro de un plazo establecido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, por lo que no pueden mantenerlos registrados permanentemente en su balance. Al haber absorbido el IVA en la adjudicación y tenerlo que aplicar nuevamente en la venta, encarece significativamente el precio del bien, sin que realmente se grave el valor agregado sino el precio del inmueble en dos oportunidades, provocando un efecto perjudicial severo para las entidades citadas.

Tomando en cuenta que la propuesta viabiliza y fortalece las diferentes opciones del proceso de resolución bancaria, se estima apropiado aprobar las reformas y adiciones de los artículos citados.

V. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE LEY

LEY DE BANCOS Y GRUPOS FINANCIEROS:

Artículo 8.

Procedimientos.

En este artículo se adiciona el párrafo cuarto, que se refiere a una excepción aplicable a las sociedades de capital público, cuando estas pretendan ser accionistas de bancos, en donde por su naturaleza es difícil determinar la identidad de los propietarios finales de sus acciones, aspecto que era exigido en la ley.

En el quinto párrafo, se aclara que dicha norma será reglamentada por Junta Monetaria.



00000090

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

Artículo 11.

Fusión o adquisición.

En virtud de que la absorción es una modalidad de fusión, se elimina dicho vocablo y se adecua a lo establecido en el Código de Comercio de Guatemala. Asimismo, se adicionan mecanismos para la venta, cesión o cualquier otra forma de enajenación de cartera de créditos entre bancos y/o sociedades financieras.

Artículo 41 Bis.

Beneficiarios.

Es necesario contar con el instrumento legal que defina claramente el derecho de los beneficiarios designados por el titular de la cuenta en caso de muerte de éste, sin que colisione con las normas del derecho civil relativas a la sucesión hereditaria.

Artículo 41 Ter.

Cuentas de depósitos inactivas.

Se hace necesario definir las cuentas inactivas y establecer el destino que deba dárseles luego de un plazo prudencial. En este sentido, se estima que para que una cuenta se considere inactiva debe transcurrir un plazo de diez años. El saldo de la cuenta y los respectivos intereses devengados, serían trasladados al Banco de Guatemala para incrementar el Fondo para la Protección del Ahorro.

Artículo 47.

Concentración de inversiones y contingencias.

Se amplía el ámbito de aplicación de los límites de concentración de inversiones y contingencias, a las entidades fuera de plaza y las empresas especializadas en servicios financieros que formen parte de un grupo financiero. Asimismo, se establecen mecanismos de regularización automática cuando se superan dichos límites.

Se incluye como atribución del Consejo de Administración la aprobación de financiamiento a personas vinculadas.

Artículo 49 Bis.

Distribución de dividendos.

Se faculta a la Superintendencia de Bancos, para adoptar medidas prudenciales tales como la restricción en la distribución de dividendos, con el fin de fortalecer el patrimonio de las entidades supervisadas en protección de los intereses de los ahorrantes.

Artículo 58 Bis.

Calificación de riesgo.

Se requiere a los bancos, las sociedades financieras y entidades fuera de plaza o entidades off shore que obtengan anualmente una calificación de riesgo para fortalecer la disciplina de mercado. La publicación de dicha calificación será reglamentada por la Junta Monetaria.

Artículo 65.

Patrimonio computable.



000-0091

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

Se modifica la determinación del patrimonio computable y se clarifican los componentes del capital primario y complementario para adecuarlos a los estándares internacionales.

Artículo 78.

Junta de Exclusión de Activos y Pasivos.

Para salvaguardar el interés del público y el ahorro de los depositantes, en el tercer párrafo se agrega que todos los mandatos otorgados en nombre del banco o de la sociedad financiera suspendidos quedan revocados para evitar que mandatarios nombrados por dichas entidades puedan ocasionar daño al patrimonio de éstas u obstaculizar el proceso de exclusión.

Artículo 79.

Facultades de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos.

En este artículo se dota de otras alternativas de resolución al proceso de exclusión, tales como la venta parcial o total de los activos de la entidad suspendida y la potencial participación de la banca extranjera en el proceso de resolución, para no depender de un solo esquema de salida, en aras de contar con más vehículos para salvaguardar los recursos de los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

Artículo 79 Bis.

Representante legal.

Incorpora la figura del Representante Legal de la entidad suspendida, para que pueda representar judicial y extrajudicialmente a ésta y de esta manera atienda todas las obligaciones a cargo de dicha entidad en tanto llega su liquidación judicial.

Artículo 81.

Participación del Fondo para la Protección del Ahorro.

Se faculta al FOPA para participar en los procesos de resolución bancaria atendidos mediante soluciones de mercado, tales como enajenación parcial o total, en los que dada la celeridad del proceso, el adquirente no dispondría de tiempo suficiente para establecer el valor económico de los activos que recibe.

Artículo 82 Bis.

De la operación del fideicomiso.

Se aclara la función del Banco de Guatemala, en su calidad de administrador de los recursos del FOPA, para otorgar, aclarar, ampliar o modificar los instrumentos atinentes a la transmisión de los activos de la entidad suspendida.

Artículo 83.

Declaratoria de quiebra.

Se reforma el tercer párrafo, al incorporar el vocablo enajenación, por considerarlo más amplio, lo cual facilita el proceso que regula dicho precepto.

Artículo 84.

Liquidación de saldos o remanentes.

Se adiciona el párrafo segundo, referente a la enajenación, para adecuar la redacción a los mecanismos de resolución bancaria que se incorporan al artículo 79.



00000092

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

- Artículo 84 Bis. Exención.**
Brindar mayor agilidad y reducción del costo de los procesos de resolución bancaria, racionalizar el valor y viabilizar la enajenación de los activos de la entidad suspendida, con el fin de obtener mayores recursos para la restitución a los depositantes y evitar costos adicionales al Estado relacionados con restituciones al FOPA.
- Artículo 84 Ter. Sociedades Financieras.**
Se adiciona este artículo para hacer extensivo el proceso de exclusión de activos y pasivos, también a las sociedades financieras privadas.
- Artículo 86. Fuentes de financiamiento.**
Se reforma el inciso e) para tener mayor claridad del momento en que el Estado debe aportar recursos al FOPA.
- Artículo 88. Cuotas al Fondo.**
Busca agilizar la capitalización del FOPA e incorpora el concepto de una prima diferenciada, basada en riesgos, en la composición de la cuota que cada banco debe aportar al mismo.
- Artículo 113. Requisitos para su funcionamiento.**
Se adicionan requisitos prudenciales para el funcionamiento de entidades fuera de plaza o entidades off shore y su consecuente incorporación a un grupo financiero. Además, se establecen condiciones mínimas para la apertura de cuentas de depósito en estas entidades, con el fin de evitar que el pequeño depositante, sin cobertura de FOPA, realice operaciones con entidades fuera de plaza.
- Artículo 114. Revocatoria de autorización de funcionamiento de las entidades fuera de plaza o entidades off shore.**
Se incorporan causales adicionales para revocar la autorización de funcionamiento de las entidades fuera de plaza o entidades off shore.

LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE GUATEMALA

- Artículo 48. Prestamista de última instancia.**
Se flexibilizan las condiciones del mecanismo de prestamista de última instancia para solventar deficiencias temporales de liquidez que presenten los bancos del sistema, haciéndolo más accesible.

TRANSITORIOS Y FINALES

- Artículo 23. Cuentas Inactivas**



00000093

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

Se adiciona este artículo para dar una gradualidad a las cuentas de depósitos de ahorro y monetarios, que a la fecha de entrada en vigencia del decreto, tengan más de 10 años de estar inactivas.

Artículo 24.

Reducción de concentración de unidad de riesgo vinculada.

Se adiciona este artículo con el fin de dar una gradualidad a los bancos, sociedades financieras, entidades fuera de plaza o entidades off shore y empresas especializadas en servicios financieros que formen parte de un grupo financiero, para que adecuen sus unidades de riesgo vinculadas a los límites establecidos.

Artículo 25.

Componente fijo de las cuotas al fondo.

Durante los primeros nueve meses de vigencia, se mantendrá la cuota mensual establecida mediante resolución de la Junta Monetaria JM-37-2007 del 7 de febrero de 2007. Posteriormente, dicha cuota será del dos por millar sobre sus obligaciones depositarias al Fondo para la Protección del Ahorro.

Artículo 26.

Adecuación de operaciones de las entidades fuera de plaza o entidades off shore.

Se otorga un período de gradualidad a las entidades fuera de plaza o entidades off shore, para que adecuen sus obligaciones depositarias a las condiciones establecidas en la literal f) del artículo 113.

Artículo 27.

Bonos emitidos conforme la resolución número JM-172-2007 emitida por Junta Monetaria.

Se establece que los bonos que fueron autorizados por la Junta Monetaria, conforme a la resolución JM-172-2007 del 24 de octubre de 2007, previo a la vigencia de esta ley, mantendrán su plena vigencia y validez legal.

Artículo 28.

Mayoría calificada.

En vista de que se va a modificar la Ley Orgánica del Banco de Guatemala se necesita que las modificaciones sean aprobadas con mayoría calificada.

Artículo 29.

Vigencia.

La vigencia de estas modificaciones será a partir del uno de marzo de 2010.

VI. OPINIONES RECABADAS

La Comisión de Economía y Comercio Exterior llevó a cabo reuniones con los sectores interesados, durante noviembre de 2009. Los sectores representados fueron los siguientes:

1. Cámara de Finanzas de Guatemala

Mediante nota de referencia VP-CFG—027-2009, del 23 de septiembre de 2009, la Cámara de Finanzas de Guatemala, el Vicepresidente Lic. José Adolfo Porras Garín, transcribe lo conducente de lo resuelto por la Junta Directiva de dicha cámara, en el sentido, de emitir opinión técnica



00000094

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

favorable a la iniciativa de merito, toda vez que contribuirá a modernizar las normas financieras del país.

2. Central American Bussiness Intelligence –CABI-

Mediante documento proporcionado por CABI, se adjuntan comentarios a la propuesta de reforma, que en su parte conducente indican que las mismas son un paso adelante en la dirección correcta y a la vez estima que no son suficientes para que Guatemala alcance los estándares internacionales relacionados con la protección de los usuarios del sistema financiero.

3. Asociación de Investigación y Estudios Sociales –ASIES-

Con nota del 29 de septiembre de 2009, Raquel Zelaya Secretaria Ejecutiva, adjunta comentarios en donde no manifiesta oposición a la iniciativa referida.

4. Banco de Guatemala

Con nota del 10 de septiembre de 2009, la Presidenta del Banco de Guatemala Lic. María Antonieta de Bonilla, manifiesta que el Banco de Guatemala comparte plenamente el contenido de la iniciativa referida.

5. Superintendencia de Bancos –SIB-

Con referencia al Oficio No. 4040-2009, del 29 de septiembre del 2009, el Superintendente de Bancos Lic. Edgar B. Barquín Duran, manifiesta que es necesaria para mejorar el marco regulatorio en el país con lo cual se coadyuvara a hacer más eficiente el funcionamiento del sistema y de la gestión bancaria, a fortalecer las normas prudenciales con lo cual la banca guatemalteca se vuelve más competitiva a nivel internacional, a mejorar la transparencia de información en beneficio del público usuario y finalmente, se podrá contar con un marco legal que contiene otras alternativas para afrontar en forma efectiva la resolución de entidades con problemas.

6. Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–

En oficio REF.C-SAT-D-038-2009 del 1 de diciembre de 2009 el Superintendente de Administración Tributaria transcribió la resolución del Directorio de la SAT, en la cual dicho órgano se pronunció favorablemente a las exenciones fiscales propuestas en el artículo 84 bis, no así las del artículo 11.

7. Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN–

En nota 1224 de fecha 26 de noviembre de 2009, el Ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, se pronuncia, sin emitir objeción a la propuesta de reforma de ley.

Cabe mencionar que se atendieron las distintas opiniones y ponencias y se incluyeron en el anteproyecto aquellas que, por consenso, se consideraron necesarias y aplicables, según las circunstancias.



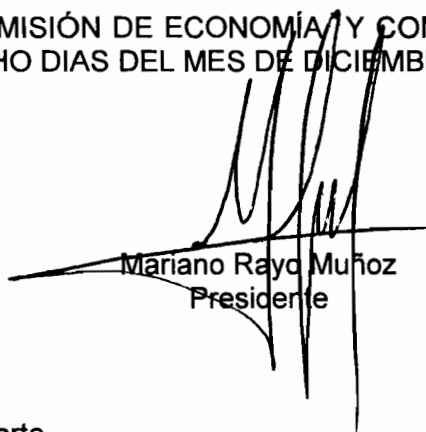
00000095

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

VII. DICTAMEN DE LA COMISIÓN:

Sobre la base de lo expuesto anteriormente, leyes citadas y lo que para el efecto establece el artículo 239 inciso d) de la Constitución Política de la República, 39, 40, 41 y 111 de la Ley del Organismo Legislativo, la Comisión de Economía y Comercio Exterior emite **DICTAMEN FAVORABLE** relacionado con la Iniciativa de Ley número de registro **4073** del Presidente de la República, la cual se somete a consideración del Honorable Pleno para que, de merecer su aprobación, dicha iniciativa se convierta en ley de la República de Guatemala.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.



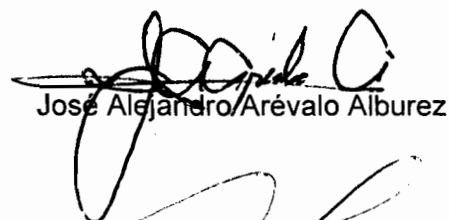
Mariano Rayo Muñoz
Presidente

Ricardo Antonio Saravia Torrebiarte
Vicepresidente

Lester Abigahil Reyna Girón
Secretario



Rosa María Angel Madrid de Frade

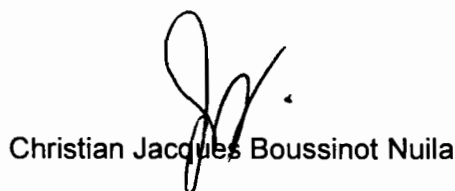


José Alejandro Arévalo Alburez

Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona



Manuel De Jesús Barquín Durán



Christian Jacques Boussinot Nuila

César Augusto Del Aguila López



00000096

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior



Carlos Rafael Frón Morales



Oliverio García Bedás



Rubén Eduardo Mejía Linares



Jorge Méndez Herbruger

Carlos Santiago Nájera Sagastume

Eduardo Genis Quej Chen

Oscar Armando Quintanilla Villegas



William Rubén Resinos Sandoval

Christian Michael Ros Acevedo



César Leonel Soto Arango



Fredy Viana Ruano

Roberto Ricardo Villate Villatoro



000-0097

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior*

DECRETO NÚMERO ____-2010

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece dentro de las obligaciones fundamentales del Estado proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión, lo cual requiere que el marco regulatorio del sistema financiero nacional esté acorde con la situación económico financiero y social de Guatemala, a efecto que apoye la producción y promueva el desarrollo del país.

CONSIDERANDO:

Que en ese contexto, se debe fortalecer la legislación financiera guatemalteca para salvaguardar de mejor forma los intereses de los depositantes de las instituciones bancarias a fin de mantener la estabilidad y solvencia del sistema financiero y, por consiguiente, el adecuado funcionamiento del sistema de pagos.

CONSIDERANDO:

Que la crisis financiera a nivel mundial afecta nuestra economía por lo que es conveniente tomar las medidas necesarias para fortalecer las instituciones del sistema financiero nacional, la protección de los depositantes y orientar la administración adecuada de los riesgos.

CONSIDERANDO:

Que es importante crear mecanismos dentro de la red de seguridad bancaria que permitan a los bancos contar con acceso a recursos para resolver sus problemas temporales de liquidez.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

Las siguientes:



00000098

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior*

**REFORMAS AL DECRETO 19-2002, LEY DE BANCOS Y GRUPOS
FINANCIEROS Y AL DECRETO 16-2002, LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE
GUATEMALA**

TITULO I

**REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 19-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA, LEY DE BANCOS Y GRUPOS FINANCIEROS**

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 8 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

“ARTÍCULO 8. Procedimientos. La solicitud para constituir un banco, establecer una sucursal de banco extranjero o registrar una oficina de representación de banco extranjero, deberá presentarse a la Superintendencia de Bancos, indicando la entidad que conforme a esta Ley se quiere constituir, establecer o registrar, acompañando la información y documentación que establezcan los reglamentos respectivos.

La Superintendencia de Bancos, en el caso de bancos y sucursales de bancos extranjeros ordenará, a costa de los interesados, la publicación en el diario oficial y en otro de amplia circulación en el país, de las solicitudes de autorización que le presenten, incluyendo los nombres de los organizadores y futuros accionistas, a fin de que quien se considere afectado pueda hacer valer sus derechos ante la autoridad competente.

Las personas jurídicas podrán participar como organizadoras y/o accionistas de bancos, siempre que la estructura de propiedad de las mismas permita determinar con precisión la identidad de las personas individuales que sean propietarias finales de las acciones en una sucesión de personas jurídicas. Para los efectos del inciso c) del artículo 7, los interesados deberán proporcionar a la Superintendencia de Bancos la nómina de los accionistas individuales que posean más del cinco por ciento (5%) del capital pagado de dichas personas jurídicas, así como cualquier otra información que dicha Superintendencia considere necesario obtener. Para efectos del cómputo anterior, se sumarán las acciones del cónyuge e hijos menores de edad.

Se exceptúan de la identificación de los propietarios finales de acciones a que se refiere el párrafo anterior, las personas jurídicas que coticen en bolsa en mercados financieros regulados y supervisados, hasta por el monto del capital cotizado en dichos mercados y que cuenten con una calificación internacional de riesgo otorgada por una calificadora de riesgo reconocida por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (Securities and Exchange Commission –SEC-).



00000093

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, reglamentará lo establecido en el presente artículo."

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 11 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 11. Fusión o adquisición. La fusión de bancos y/o sociedades financieras o la adquisición de acciones de un banco o una sociedad financiera por otra de similar naturaleza, así como la cesión de una parte sustancial del balance de un banco o una sociedad financiera, serán autorizadas o denegadas por la Junta Monetaria. No podrá otorgarse dicha autorización sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos.

La venta, cesión o cualquier otra forma de enajenación de cartera de créditos que realice un banco o una sociedad financiera a otro banco o a otra sociedad financiera, así como la adjudicación de bienes a favor de un banco o una sociedad financiera, ya sea voluntaria o en virtud de acción judicial, para la cancelación parcial o total de créditos a su favor, están exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, Decreto número 27-92 del Congreso de la República.

Los documentos o contratos por medio de los cuales se formalice la venta, cesión o cualquier otra forma de enajenación de cartera de créditos que realice un banco o una sociedad financiera a otro banco o a otra sociedad financiera, así como aquellos documentos o contratos en los cuales se haga constar la adjudicación de bienes a favor de un banco o una sociedad financiera, ya sea voluntaria o en virtud de acción judicial, para la cancelación parcial o total de créditos a su favor, están exentos del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto número 37-92 del Congreso de la República.

El segundo párrafo del artículo 1444 del Código Civil, Decreto-Ley número 106, no le será aplicable a las operaciones a que se refiere el segundo párrafo de este artículo.

Lo establecido en el primer párrafo de este artículo será reglamentado por la Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos."

ARTÍCULO 3. Se adiciona el artículo 41 bis al Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, con el texto siguiente:

"ARTÍCULO 41 bis. Beneficiarios. Se denominarán beneficiarios a las personas que hayan sido designadas o que se designen por una persona individual titular de una cuenta de depósito monetario, a plazo o de ahorro, para recibir el saldo de la misma, en caso de muerte de ésta.

Al ocurrir la muerte del titular, el o los beneficiarios designados adquirirán un derecho propio sobre el saldo de las mismas, el cual podrán exigir directamente del banco, siempre que no se encuentre limitado contractualmente o restringido por autoridad competente.



00000100

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

En todo caso, el o los beneficiarios deberán acreditar ante el banco depositario la muerte del titular de la cuenta.

Cuando se trate de depósitos monetarios, el beneficiario únicamente podrá retirar los fondos disponibles después de haber transcurrido un plazo de seis (6) meses, contado a partir de la fecha de muerte del titular de la cuenta.

El pago efectuado por el banco a los beneficiarios designados, en los términos indicados en el presente artículo, extingue las obligaciones derivadas del contrato de depósito bancario."

ARTÍCULO 4. Se adiciona el artículo 41 ter al Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, con el texto siguiente:

"ARTÍCULO 41 ter. Cuentas de depósitos inactivas. Las cuentas de depósitos monetarios y de ahorro, en moneda nacional, con saldos menores a un mil quetzales (Q 1,000.00) y las cuentas de depósitos monetarios y de ahorro en moneda extranjera, con saldos menores a ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 125.00), que durante un período de 10 años permanezcan inactivas, excepto las que se encuentren condicionadas por el cuentahabiente o limitadas contractualmente o restringidas por autoridad competente, prescribirán, de pleno derecho, junto con los intereses que hubieren devengado, en favor del Fondo para la Protección del Ahorro, aspecto que el banco deberá hacer del conocimiento de los cuentahabientes por los medios que estime convenientes.

Se entenderá que una cuenta ha permanecido inactiva cuando su titular no haya efectuado transacciones de depósito o retiro en el plazo indicado.

El traslado del saldo de las cuentas a que se refiere el párrafo primero de este artículo al Fondo para la Protección del Ahorro se hará dentro del mes siguiente al del vencimiento de los diez (10) años mencionados."

ARTÍCULO 5. Se reforma el artículo 47 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 47. Concentración de inversiones y contingencias. Los bancos, las sociedades financieras, así como las entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas especializadas en servicios financieros que formen parte de grupos financieros, con excepción de las operaciones financieras que pueden realizar, sin limitación alguna, en títulos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas o el Banco de Guatemala, no podrán efectuar operaciones que impliquen financiamiento directo o indirecto de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten, tales como, pero no circunscrito a, bonos, pagarés, obligaciones y/o créditos, ni otorgar garantías o avales, que en conjunto excedan los porcentajes siguientes:

- a) Quince por ciento (15%) del patrimonio computable a una sola persona individual o jurídica, de carácter privado o a una sola empresa o entidad del Estado o autónoma. Se exceptúan de



00000101

Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Comisión de Economía y Comercio Exterior

este límite los excesos transitorios derivados de depósitos interbancarios de naturaleza operativa o de los depósitos e inversiones que las empresas del grupo financiero puedan tener en el banco de su grupo financiero.

- b) Treinta por ciento (30%) del patrimonio computable a dos o más personas relacionadas entre sí que formen parte de una unidad de riesgo.
- c) Treinta por ciento (30%) del patrimonio computable a dos o más personas vinculadas, las que se considerarán como una sola unidad de riesgo. Dicho porcentaje podrá incrementarse hasta el cincuenta por ciento (50%) del patrimonio computable, si el excedente lo constituyen activos crediticios garantizados totalmente, durante el plazo del crédito, con certificados de depósitos a plazo o pagarés financieros emitidos por la propia institución, los que deberán quedar en custodia de la misma. Además, deberá pactarse por escrito que, en caso el deudor sea demandado o incurra en incumplimiento, sin más trámite, se hará efectiva la garantía.

Los depósitos e inversiones que las empresas del grupo financiero mantengan en el banco de su grupo financiero, no deberán computarse para efectos de los límites establecidos en este inciso.

- d) Treinta por ciento (30%) del patrimonio computable en inversiones que realicen las entidades fuera de plaza o entidades off shore en títulos representativos de deuda soberana de otros países distintos a Guatemala, conforme la escala de límites que establezca la Junta Monetaria con base en la calificación de riesgo soberano que otorguen calificadoras de riesgo reconocidas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (Securities and Exchange Commission -SEC-).
- e) Cien por ciento (100%) del patrimonio computable, al conjunto de inversiones que realicen los bancos o sociedades financieras en títulos representativos de deuda soberana de otros países distintos a Guatemala, que cuenten con la más alta calificación de riesgo soberano que, en la escala de grado de inversión, sea otorgada por calificadoras de riesgo reconocidas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (Securities and Exchange Commission -SEC-).

Cuando las entidades excedan los límites establecidos en el presente artículo, deberán deducir de inmediato dicho exceso de su patrimonio computable, sin perjuicio de ser sancionadas de conformidad con la presente Ley.

Para los efectos de lo dispuesto en la presente Ley se establecen las definiciones siguientes:

1. Personas relacionadas: son dos o más personas individuales o jurídicas independientes a la entidad que les concede el financiamiento, pero que mantienen una relación directa o indirecta entre sí, por relaciones de propiedad, de administración o de cualquier otra índole que defina la Junta Monetaria.



00000102

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

2. Persona vinculada: es la persona individual o jurídica, relacionada directa o indirectamente con la entidad que le concede el financiamiento, por relaciones de propiedad, de administración o cualquier otra índole que defina la Junta Monetaria.
3. Unidad de riesgo: la constituyen dos o más personas relacionadas o vinculadas que reciban y/o mantengan financiamiento de una entidad.

La Superintendencia de Bancos presumirá la existencia de unidades de riesgo con base en criterios que incluyan razones de propiedad, administración, estrategias de negocios conjuntas y otros elementos debidamente fundamentados por la Superintendencia de Bancos.

El financiamiento a personas vinculadas, que otorguen las entidades a que se refiere el presente artículo, deberá ser aprobado por su consejo de administración, o quien haga sus veces.

La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, reglamentará lo establecido en el presente artículo."

ARTÍCULO 6. Se adiciona el artículo 49 bis al Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, con el texto siguiente:

"ARTÍCULO 49 bis. Distribución de dividendos. La Superintendencia de Bancos, observando el debido proceso, podrá limitar a los bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza o entidades off shore, la distribución de dividendos, bajo cualquier modalidad o forma que adopten tales dividendos, cuando a juicio de dicho órgano y como medida prudencial sea necesario fortalecer la liquidez y/o la solvencia del banco, sociedad financiera o entidad fuera de plaza respectiva. Dicha limitación no será aplicable a las acciones de voto limitado con dividendos preferentes."

ARTÍCULO 7. Se adiciona el artículo 58 bis al Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, con el texto siguiente:

"ARTÍCULO 58 bis. Calificación de riesgo. Los bancos, las sociedades financieras y las entidades fuera de plaza o entidades off shore, deberán obtener anualmente una calificación de riesgo otorgada por una empresa calificadora de riesgo reconocida por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (Securities and Exchange Commission –SEC-) o representantes de éstas que realicen calificaciones a nivel regional, u otras calificadoras de riesgo que cumplan estándares equivalentes. En todos los casos las calificadoras de riesgo deberán registrarse en la Superintendencia de Bancos conforme a las instrucciones generales que ésta emita. El reporte de la calificación otorgada por la calificadora deberá ser enviado al ente supervisor y la calificación actualizada deberá ser publicada por la entidad calificada con la gradualidad que establezca la Junta Monetaria.

Si se trata de sucursales de bancos extranjeros se aceptará la calificación del banco matriz, siempre que haya sido otorgada por una empresa calificadora de riesgo de las indicadas en el presente artículo.



00000103

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

La calificación de riesgo es una opinión que emite, bajo su estricta responsabilidad, la empresa calificadora, referida a un periodo determinado, en cuanto a la capacidad financiera en general de la entidad calificada para cumplir con sus obligaciones, sin comprometer al Estado cuya función de vigilancia e inspección corresponde, con exclusividad, a la Superintendencia de Bancos.

Lo establecido en el presente artículo será reglamentado por la Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos."

ARTÍCULO 8. Se reforma el artículo 65 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 65. Patrimonio computable. El patrimonio computable de un banco será la suma del capital primario más el capital complementario, deduciendo de la misma las inversiones en acciones de bancos nacionales y extranjeros, sociedades financieras, compañías aseguradoras, compañías afianzadoras, almacenes generales de depósito, empresas especializadas de servicios financieros, casas de bolsa, entidades fuera de plaza o entidades off shore, empresas de apoyo al giro bancario cuando se posea en estas como mínimo el veinte y cinco por ciento (25%) de su capital y el capital asignado a las sucursales en el exterior.

El capital complementario será aceptable como parte del patrimonio computable hasta por la suma del capital primario.

El capital primario se integra por:

- a) El capital pagado;
- b) La reserva legal;
- c) Las reservas de naturaleza permanente provenientes de utilidades retenidas;
- d) Otras aportaciones permanentes de capital; y,
- e) Las aportaciones del Estado en el caso de los bancos estatales.

El capital complementario se integra por:

- a) Las ganancias del ejercicio;
- b) Las ganancias de ejercicios anteriores;
- c) El superávit por revaluación de activos, hasta el cincuenta por ciento (50%) del capital primario, el cual no se podrá distribuir hasta que se venda el activo revaluado;



00000194

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

- d) Otras reservas de capital;
- e) Instrumentos de deuda convertible en acciones;
- f) Deuda subordinada contratada a plazo mayor de cinco años, hasta el cincuenta por ciento (50%) del capital primario. Para efectos del cómputo de la deuda subordinada dentro del capital complementario, durante los últimos cinco años para su vencimiento, se aplicará un factor de descuento acumulativo anual de veinte por ciento (20%);
- g) Bonos que combinen características de deuda y capital; y,
- h) Otros componentes que, con base en estándares internacionales, determine la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos.

Las pérdidas acumuladas y las del ejercicio corriente, y las reservas específicas para activos determinados de dudosa recuperación, se deducirán, en primer término, del capital complementario y, en caso de resultar insuficiente, del capital primario.

La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos y con base en estándares internacionales, podrá determinar las características que deben reunir los componentes del capital complementario."

ARTÍCULO 9. Se reforma el artículo 78 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 78. Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, a más tardar al día siguiente de dispuesta la suspensión de operaciones, deberá nombrar una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, conformada por tres miembros, quienes estarán relevados, como cuerpo colegiado o individualmente considerados, a prestar fianza o garantía por su actuación.

Los miembros de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos tienen todas las facultades legales para actuar judicial y extrajudicialmente dentro del ámbito de las atribuciones que le señala la ley. Tendrán, además, las facultades que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro de sus atribuciones.

Por ministerio de la ley y por razones de interés social, los derechos que incorporan las acciones del banco o de la sociedad financiera de que se trate quedan en suspenso y sus directores o administradores quedan separados de sus cargos; asimismo, quedan revocados los mandatos de toda clase que hayan sido otorgados en nombre de la entidad suspendida, en cuyo caso no será aplicable lo establecido en el artículo 1715 del Código Civil, Decreto-Ley 106.



00000105

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos dependerá funcionalmente del Superintendente de Bancos, y dará cuenta de sus actuaciones a la Junta Monetaria por medio de la Superintendencia de Bancos.

La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos deberá llevar cuenta ordenada y comprobada de su gestión.

Los miembros de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos del banco o de la sociedad financiera de que se trate, contra quienes se planteen procesos, juicios o demandas derivados de actos y decisiones adoptados de conformidad con la ley en el ejercicio de sus atribuciones, funciones u obligaciones, tienen derecho a que el Banco de Guatemala cubra los gastos y costas que sean necesarios para su defensa.

Lo dispuesto en el párrafo que antecede se aplicará a aquellos miembros de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos del banco o de la sociedad financiera de que se trate, aún cuando ya no se encuentren en el ejercicio de dichos cargos, siempre y cuando los procesos, juicios o demandas que se planteen deriven de actos y decisiones adoptados de conformidad con la ley en el ejercicio de las atribuciones, funciones u obligaciones que les correspondían."

ARTÍCULO 10. Se reforma el artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 79. Facultades de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos estará facultada para adoptar la aplicación de una o todas, sin orden determinado, de las medidas siguientes:

- a) Determinar las pérdidas y cancelarlas con cargo a las reservas legales y otras reservas y, en su caso, con cargo a las cuentas de capital;
- b) Disponer la exclusión de los activos en el balance de la entidad suspendida, en una o más de las formas siguientes:
 - b.1) Por un importe equivalente o mayor al de los pasivos mencionados en el subinciso c.1) de este artículo, y la transmisión de tales activos a un fideicomiso administrado por la entidad elegida por la Superintendencia de Bancos;
 - b.2) Por un importe equivalente al de los pasivos mencionados en el subinciso c.1) de este artículo y la enajenación de estos activos, mediante procedimientos competitivos, a favor de uno o varios bancos, conforme la reglamentación correspondiente; o,
 - b.3) Por un importe equivalente o mayor al de los pasivos mencionados en el subinciso c.2) de este artículo y la enajenación de estos activos, mediante procedimientos competitivos, a favor de un banco, conforme la reglamentación correspondiente.



000-0106

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

Los activos excluidos se tomarán de acuerdo con normas contables, a su valor en libros, neto de provisiones, reservas y cualquier otro ajuste que determine la Superintendencia de Bancos conforme a las normas y regulaciones prudenciales existentes;

c) Excluir los pasivos en el balance de la entidad suspendida, en una de las formas siguientes:

c.1) Excluir los depósitos hasta por el monto cubierto por el Fondo para la Protección del Ahorro y los pasivos laborales.

En caso el valor estimado de los activos mencionados en los subincisos b.1) y b.2) de este artículo así lo permita, se excluirán en primer lugar el resto de los depósitos y los importes debitados de cuentas de depósitos o importes recibidos, en ambos casos para la adquisición de cheques de caja o de gerencia, de giros del exterior o para transferencias de fondos, siempre que dichas operaciones no hayan sido liquidadas al momento de la suspensión de operaciones; en segundo lugar, los bonos y pagarés cuya creación y negociación haya sido autorizada por Junta Monetaria al banco o a la sociedad financiera de que se trate, siempre que no sean obligaciones convertibles, subordinadas o cualquier otro instrumento de deuda con características de capital. Las operaciones, los bonos y pagarés a que se refiere el presente párrafo que correspondan a personas vinculadas a la entidad suspendida, así como los depósitos de dichas personas, no formarán parte de la exclusión.

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, establecerá el procedimiento para determinar el monto máximo a excluir.

El banco que asuma las obligaciones que corresponda, resultado de la exclusión a que se refiere este subinciso c.1), deberá documentar la sustitución a favor del acreedor según las condiciones que se pacten.

c.2) Excluir el total de pasivos de la entidad suspendida.

El banco que asuma las obligaciones que corresponda, resultado de la exclusión a que se refiere este subinciso c.2), deberá documentar la sustitución a favor del acreedor según las condiciones que se pacten.

d) Transferir a favor de uno o varios bancos, conforme la reglamentación correspondiente, los pasivos indicados en el subinciso c.1), quienes recibirán como contrapartida un monto equivalente a tales pasivos en:

d.1) Certificados de participación que para el efecto emita el fideicomiso a que se refiere el subinciso b.1) de este artículo, neto de los costos de transacción autorizados por la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos; o,



00000107

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

d.2) Activos de la entidad suspendida.

- e) Transferir a favor de un banco, conforme la reglamentación correspondiente, los pasivos indicados en el subinciso c.2), quienes recibirán como contrapartida a tales pasivos la totalidad de activos de la entidad suspendida.

Para realizar las transferencias a que se refieren los incisos d) y e) anteriores, no se requiere el consentimiento del deudor, acreedor o cualquier otro titular.

La Junta Monetaria, previo informe de la Superintendencia de Bancos, podrá autorizar a la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos para enajenar la totalidad o un monto significativo de los activos y transferir los pasivos a que se refieren los subincisos b.2) y b.3) y el subinciso c) de este artículo, a bancos extranjeros que reúnan los requisitos siguientes:

1. Que cuenten con calificación de riesgo otorgada por una calificadora de riesgo reconocida por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (Securities and Exchange Commission -SEC-), que sea aceptable a juicio de la Superintendencia de Bancos;
2. Que tengan más de cinco (5) años de operar en el país que les otorgó la licencia; y,
3. Que en sus países de origen exista supervisión de acuerdo con estándares internacionales.

El banco extranjero al que se le enajenen activos y transfieran pasivos al amparo de lo establecido en el párrafo anterior, quedará inmediatamente autorizado para operar como sucursal de banco extranjero en el país por el plazo de un año, prorrogable por la Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, de acuerdo a la solicitud presentada por el banco interesado. En el plazo establecido, la citada entidad deberá completar los demás requisitos para el establecimiento definitivo como sucursal de banco extranjero en el país. En caso contrario, deberá proceder a su retiro del país de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la presente ley.

El presente artículo será reglamentado por la Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos."

ARTÍCULO 11. Se adiciona el artículo 79 bis al Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, con el texto siguiente:

"ARTÍCULO 79 bis. Representante legal. La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, a más tardar al día siguiente de dispuesta la suspensión de operaciones, deberá nombrar un representante legal de la entidad suspendida, quien estará investido de las facultades para representar judicial y extrajudicialmente a dicha entidad y no interferirá en las funciones y atribuciones de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos.

El representante legal, además tendrá las facultades siguientes:



00000108

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

- a) Comparecer en nombre y representación de la entidad suspendida a: otorgar cartas de pago de créditos totalmente pagados previo a la suspensión, otorgar mandatos con representación para la conservación de activos, rescindir contratos, así como otorgar otros que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades; otorgar los instrumentos de sustitución de la calidad de fiduciario de la entidad suspendida y extinguir fideicomisos en los que dicha entidad figure como fiduciario;
- b) Ser el responsable de la guarda y custodia de los bienes y documentos que le entregue la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, hasta que el depositario nombrado en el proceso de quiebra tome posesión de los mismos. Para efecto de la conservación de dichos bienes y documentos, la Junta Monetaria fijará la fuente de los recursos; y,
- c) Otras que le fije la Junta Monetaria.

El representante legal desempeñará el cargo bajo su estricta responsabilidad, debiendo rendir informe por escrito de sus actuaciones a la Junta Monetaria, por medio de la Superintendencia de Bancos, cuando termine su gestión y cuando le sea requerido por dicho cuerpo colegiado. Sus honorarios serán establecidos por la Junta Monetaria quien fijará la fuente de los mismos y gozará de la protección legal en los términos a que se refiere el artículo 78 de la presente ley."

ARTÍCULO 12. Se reforma el artículo 81 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 81. Participación del Fondo para la Protección del Ahorro. El Fondo para la Protección del Ahorro podrá, a requerimiento de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, realizar aportes, aun sin contraprestación, al Fideicomiso a que se refiere el artículo 79 de la presente ley. Adicionalmente, el Fondo para la Protección del Ahorro podrá comprar a valor facial, los certificados de participación en el fideicomiso a que se refiere el artículo 79, asimismo podrá celebrar contratos de compra venta sobre parte o la totalidad de dichos certificados. En estos casos, el total de las erogaciones que efectúe el Fondo para la Protección del Ahorro no podrá superar el monto de los depósitos del banco suspendido, cubiertos por la garantía de dicho Fondo.

El Fondo para la Protección del Ahorro, a requerimiento de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, deberá restituir en efectivo o con otros activos líquidos al banco adquirente, los activos que éste, por causas debidamente justificadas, devuelva a la entidad suspendida. El banco adquirente dispondrá de un plazo de sesenta (60) días, contado a partir de la fecha de la enajenación, para devolver los activos enajenados a la entidad suspendida, a su valor en libros o al de enajenación, el que resulte menor.

Cuando se trate de la enajenación a que se refiere el subinciso b.2) del artículo 79 de la presente ley, el valor de dicha devolución no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto de los activos de que se trate o el setenta y cinco por ciento (75%) del monto de los depósitos garantizados asumidos, el que fuere menor.



00000109

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior*

En el caso de la enajenación a que se refiere el subinciso b.3) del artículo 79, el valor de dicha devolución no podrá exceder el treinta por ciento (30%) del monto de los activos de que se trate o el cien por ciento (100%) del monto de los depósitos garantizados asumidos, el que fuere menor."

ARTÍCULO 13. Se adiciona el artículo 82 bis al Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, con el texto siguiente:

"ARTÍCULO 82 bis. De la operación del fideicomiso. Cuando la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos de la entidad suspendida haya cesado en sus funciones y atribuciones, el Banco de Guatemala, como administrador de los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro, y en su calidad de fideicomitente especial en el fideicomiso a que se refiere el subinciso b.1) del artículo 79 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, estará facultado para otorgar, juntamente con el fiduciario, los instrumentos necesarios para aclarar, ampliar o modificar los instrumentos atinentes a la transmisión de los activos al fideicomiso mencionado, hasta la terminación del mismo."

ARTÍCULO 14. Se reforma el artículo 83 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 83. Declaratoria de quiebra. La Junta Monetaria, dentro del plazo de quince (15) días de recibido el informe a que se refiere el artículo 82, instruirá a la Superintendencia de Bancos para que solicite a un Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, la declaratoria de quiebra de la entidad suspendida de que se trate.

El juzgado que conozca de tal solicitud deberá resolver la declaratoria de quiebra a que se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo de cinco (5) días contado a partir del día en que reciba dicha solicitud.

Para los efectos de la indicada declaratoria de quiebra, el juzgado tomará como base el balance proporcionado por la Superintendencia de Bancos, que resulte después de efectuarse la exclusión, transmisión o enajenación de activos y pasivos."

ARTÍCULO 15. Se reforma el artículo 84 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 84. Liquidación de saldos o remanentes. Cualquier saldo o remanente de valor que quedare en el fideicomiso a que hace referencia el subinciso b.1) del artículo 79, una vez pagados todos los certificados de participación en el mismo, se trasladará al Fondo para la Protección del Ahorro, hasta por el monto aportado por éste al fideicomiso indicado; si queda algún remanente se trasladará a la liquidación judicial.

En el caso de la enajenación de activos a que se refieren los subincisos b.2) y b.3) del artículo 79, cualquier saldo o remanente de valor que quedare en el banco suspendido, luego de la devolución a que se refiere el artículo 81, se trasladará al Fondo para la Protección del Ahorro, hasta por el



00000110

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

monto restituido al banco adquirente; si queda algún remanente se trasladará a la liquidación judicial."

ARTÍCULO 16. Se adiciona el artículo 84 bis al Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, con el texto siguiente:

"ARTÍCULO 84 bis. Exención. La transmisión o enajenación de activos, la transferencia de pasivos y la devolución de activos, que se realicen con base en los artículos 79 y 81 de la presente ley; así como la enajenación que efectúe el Fondo para la Protección del Ahorro para liquidar los activos que provengan de la exclusión de activos y pasivos, estarán exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. Asimismo, estarán exentas del impuesto sobre la renta, las rentas que obtengan los fideicomisos que se constituyan de conformidad con el subinciso b.1) del artículo 79 citado."

ARTÍCULO 17. Se adiciona el artículo 84 ter al Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, con el texto siguiente:

"ARTÍCULO 84 ter. Sociedades Financieras. La exclusión de activos y pasivos regulada en el presente Capítulo será aplicable a las sociedades financieras a que se refiere el Decreto-Ley Número 208, en lo que corresponda, según la naturaleza de sus operaciones."

ARTÍCULO 18. Se reforma el artículo 86 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 86. Fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento del Fondo para la Protección del Ahorro estarán constituidas por:

- a) Las cuotas que obligatoriamente deberán aportar los bancos nacionales y sucursales de bancos extranjeros, de conformidad con el artículo 88;
- b) Los rendimientos de las inversiones de los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro, multas e intereses;
- c) Los recursos en efectivo que se obtengan en virtud del proceso de liquidación del banco de que se trate, con motivo de la subrogación de derechos a que se refiere el artículo 91;
- d) Los recursos en efectivo que se obtengan de la venta de los activos que le hubieren sido adjudicados al Fondo para la Protección del Ahorro, en virtud del proceso de liquidación del banco de que se trate, con motivo de la subrogación de derechos a que se refiere el artículo 91. Queda entendido que los indicados activos que le sean adjudicados en pago al Fondo para la Protección del Ahorro no constituirán fuente de financiamiento del mismo, en tanto no sean vendidos y los recursos en efectivo producto de la venta hayan sido percibidos;



00000111

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior*

- e) Los aportes del Estado, para fortalecer la posición financiera de dicho Fondo o para que éste pueda cumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 87, a requerimiento del Banco de Guatemala, como administrador del Fondo para la Protección del Ahorro, previo dictamen conjunto que emita la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala; y,
- f) Otras fuentes que incrementen los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro.

Los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro serán inembargables, no tendrán carácter devolutivo y sólo podrán ser aplicados para las finalidades previstas en esta Ley."

ARTÍCULO 19. Se reforma el artículo 88 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 88. Cuotas al Fondo. Las cuotas que cada banco debe aportar mensualmente al Fondo para la Protección del Ahorro, se integran por los componentes siguientes:

- a) Un componente fijo, equivalente a una doceava parte del dos por millar del promedio mensual de la totalidad de las obligaciones depositarias que registren tales bancos, durante el mes inmediato anterior; y,
- b) Un componente variable, equivalente a una doceava parte de hasta el dos por millar del promedio mensual de la totalidad de las obligaciones depositarias que registren tales bancos, durante el mes inmediato anterior. La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos y con el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros que la integran, determinará las tasas a aplicar, así como el mecanismo mediante el cual se calculará la cuota que corresponderá pagar a cada banco, con base en criterios de riesgo.

Para el cálculo de las cuotas a que se refiere el presente artículo, se tomará como base la información que la Superintendencia de Bancos requerirá a cada banco.

Para el pago de las cuotas de referencia, el Banco de Guatemala queda autorizado para que dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente al que corresponda la información, debite las cuentas de depósito que cada banco mantiene para efectos del encaje bancario.

Cuando un banco no proporcione la información necesaria para el cálculo de la cuota, el Banco de Guatemala debitará la cuenta respectiva con base en la última información proporcionada por el banco, sin perjuicio de efectuar los ajustes pertinentes cuando se complete la información requerida.

Si luego de realizar dichos ajustes, resulta una diferencia que pagar por el banco a favor del Fondo para la Protección del Ahorro, se calcularán sobre dicha diferencia intereses a favor del Fondo para la Protección del Ahorro, por el equivalente a la aplicación de una vez y media la tasa máxima de interés anual que el propio banco hubiere cobrado en sus operaciones activas durante el mes a que corresponda la diferencia, por el tiempo que hubiere estado pendiente el pago. En el caso de que la



00000112

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

diferencia fuere a favor del banco, la misma se aplicará a las cuotas de los meses siguientes hasta agotarla.”

ARTÍCULO 20. Se reforma el artículo 113 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

“ARTÍCULO 113. Requisitos para su funcionamiento. Para operar en Guatemala, las entidades fuera de plaza o entidades off shore deberán obtener la autorización de funcionamiento de la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, declarar que forman parte de un grupo financiero de Guatemala, y acreditar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

- a) Que incondicional e irrevocablemente acepta en forma escrita quedar sujeta a la supervisión consolidada de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, en los términos señalados en el artículo 28 y a la legislación contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo;
- b) Que presente toda la información que le sea requerida por la Superintendencia de Bancos y por el Banco de Guatemala, la cual podrá ser verificada en cualquier momento por la Superintendencia de Bancos. La información sobre sus operaciones activas y contingentes deberá ser presentada en forma detallada. La información sobre las operaciones pasivas deberá ser presentada en forma agregada y sin revelar la identidad de los depositantes o inversionistas;
- c) Que acredite ante la Superintendencia de Bancos de Guatemala, que autorizó a las autoridades supervisoras de su país de origen para realizar intercambio de información referente a ella;
- d) Que las autoridades supervisoras bancarias de su país de origen apliquen estándares prudenciales internacionales, al menos tan exigentes como los vigentes en Guatemala, relativos, entre otros, a requerimientos mínimos patrimoniales y de liquidez. De no ser así, se sujetará a las normas prudenciales y de liquidez que fije la Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos para estas entidades, y que podrán ser las mismas o el equivalente, en su caso, de las aplicadas a los bancos domiciliados en Guatemala;
- e) Que comunique por escrito a sus depositantes, que los depósitos que éstos realicen no están cubiertos por el Fondo para la Protección del Ahorro y que el régimen legal aplicable a tales depósitos y otros pasivos será el del país en que se constituyó o registró la entidad fuera de plaza o la entidad off shore; y,
- f) Que tanto el valor de apertura de cada una de las cuentas de depósito como el saldo promedio mensual de las mismas, no sea menor a diez mil dólares (US\$10,000.00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra moneda. En caso la cuenta registre un saldo promedio inferior al establecido, durante dos (2) meses consecutivos, la misma deberá ser cancelada, debiendo informárselo al depositante.



00000113

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior*

Este requisito no será aplicable cuando se constituyan cuentas con el objeto exclusivo de:

- i) Acreditar intereses generados por depósitos a plazo, a que se refiere este inciso, constituidos en la entidad fuera de plaza o entidad off shore; o,
- ii) Debitar en forma automática el pago de capital e intereses de créditos otorgados por la entidad fuera de plaza o entidad off shore, siempre que el monto original de dichos créditos sea superior a cincuenta mil dólares (US\$50,000.00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra moneda.

Las entidades fuera de plaza o entidades off shore que no obtengan autorización de funcionamiento o que una vez autorizadas para funcionar incumplieren uno o varios de los requisitos que les impone el presente artículo, no podrán realizar intermediación financiera en Guatemala, ni directamente ni por medio de terceros. Se entenderá por terceros a cualquier persona individual o jurídica que participe en cualquier fase del procedimiento que se utilice para la captación de recursos del público en Guatemala, con destino a dichas entidades fuera de plaza. Si realizaren intermediación financiera con violación a lo dispuesto en este párrafo, quedarán sometidas a lo estipulado en el artículo 96.

Lo establecido en el presente artículo será reglamentado por la Junta Monetaria a propuesta de la Superintendencia de Bancos."

ARTÍCULO 21. Se reforma el artículo 114 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual queda así:

"ARTÍCULO 114. Revocatoria de autorización de funcionamiento de las entidades fuera de plaza o entidades off shore. La Junta Monetaria, previo informe de la Superintendencia de Bancos, y observando el debido proceso, deberá revocar la autorización de funcionamiento de las entidades fuera de plaza o entidades off shore, cuando ocurra uno o más de los casos siguientes:

- a) Incumplan uno o más requisitos a que se refiere el artículo 113;
- b) La entidad sea condenada en sentencia firme, dentro o fuera de la República de Guatemala, por los delitos de lavado de dinero u otros activos, de financiamiento del terrorismo u otros delitos vigentes en el país, y que a juicio de la Superintendencia de Bancos ameriten tal medida;
- c) Se compruebe que el o los solicitantes presentaron información o documentación falsa en su solicitud de autorización para operar en Guatemala;
- d) Por intervención, disolución, liquidación o quiebra de la entidad fuera de plaza o entidad off shore o la cancelación de su licencia por parte de las autoridades competentes del país donde se encuentre legalmente constituida;



00000114

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior*

- e) Cuando deje de formar parte de un grupo financiero o cuando se disuelva el mismo;
- f) Cuando la deficiencia patrimonial sea mayor al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio requerido de la entidad fuera de plaza; y,
- g) Por otras razones debidamente fundamentadas en informe de la Superintendencia de Bancos.

A partir de la fecha de revocatoria, las entidades fuera de plaza o entidades off shore dispondrán de un plazo de seis (6) meses para el cierre de sus operaciones en Guatemala, el cual podrá ser prorrogado por la Junta Monetaria a solicitud de la Superintendencia de Bancos."

TITULO II

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 16-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE GUATEMALA

ARTÍCULO 22. Se reforma el artículo 48 del Decreto Número 16-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, el cual queda así:

"ARTÍCULO 48. Prestamista de última instancia. Con base en la política monetaria, cambiaria y crediticia determinada por la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala podrá otorgar crédito a los bancos del sistema, únicamente para solventar deficiencias temporales de liquidez, tomando en cuenta para ello un informe que le deberá presentar el Superintendente de Bancos sobre la situación de liquidez, solvencia, rentabilidad y calidad de los principales activos del banco solicitante.

El monto del crédito podrá ser hasta el equivalente del cien por ciento (100%) de la suma del encaje promedio requerido en el período mensual precedente del banco de que se trate, quien deberá garantizarlo con títulos valores o garantía prendaria de créditos, ambos de la más alta calidad, o garantía hipotecaria. El plazo de dicho crédito no podrá ser mayor de sesenta (60) días calendario, el cual, a solicitud razonada del banco de que se trate, podrá ser prorrogado por la mitad del plazo original. La tasa de interés a ser aplicada al crédito deberá ser superior a la que en promedio aplique en operaciones activas el Banco de que se trate. Únicamente se podrá otorgar, a un mismo Banco, hasta un máximo de dos (2) créditos en un período de doce (12) meses, siempre que los mismos se otorguen en dos meses no consecutivos dentro de tal período.

La Superintendencia de Bancos deberá informar a la Junta Monetaria, en un plazo que no exceda de diez (10) días hábiles después del otorgamiento del crédito, sobre las causas que originaron las deficiencias de liquidez, así como la calidad y situación en que se encuentran las garantías que respaldan el crédito.



00000115

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

Lo establecido en el presente artículo, será reglamentado por la Junta Monetaria a propuesta del Banco de Guatemala.”

TITULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTÍCULO 23. Transitorio. Cuentas Inactivas. Dentro del plazo de noventa (90) días contado a partir de la vigencia de este decreto, los bancos del sistema comunicarán por los medios que estime pertinentes, las cuentas de depósitos monetarios y de ahorro que por diez (10) años o más han permanecido inactivas en los términos a que se refiere el artículo 41 ter de la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Transcurrido el plazo fijado en el párrafo anterior, los bancos dispondrán de un mes para efectuar el traslado del saldo de las cuentas y de los intereses que hubieren generado, al Fondo para la Protección del Ahorro.

ARTÍCULO 24. Transitorio. Reducción de concentración de unidad de riesgo vinculada. Si al entrar en vigencia el presente Decreto la unidad de riesgo vinculada presenta exceso al límite establecido en el inciso c) del artículo 47 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, éste deberá ser reducido en los porcentajes y plazos siguientes:

Plazo	Exceso reducido en
Dentro del primer año de vigencia del presente Decreto	25%
Dentro del segundo año de vigencia del presente Decreto	50%
Dentro del tercer año de vigencia del presente Decreto	75%
Dentro del cuarto año de vigencia del presente Decreto	100%

Para este efecto, las entidades a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, deberán presentar a la Superintendencia de Bancos la integración de la unidad de riesgo vinculada, a más tardar dos (2) meses a partir de la vigencia de este Decreto.

ARTICULO 25. Transitorio. Componente fijo de las cuotas al Fondo. En los primeros nueve meses de vigencia de este Decreto, la cuota que los bancos deberán aportar mensualmente al Fondo para la Protección del Ahorro a que se refiere el inciso a) del artículo 88 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros será una doceava parte del uno punto cinco por millar del promedio mensual de la totalidad de las obligaciones depositarias, establecida en la resolución número JM-37-2007 emitida por la Junta Monetaria. A partir del décimo mes de vigencia, los bancos aportarán mensualmente una doceava parte del dos por millar a que se refiere el inciso citado.

ARTÍCULO 26. Transitorio. Adecuación de las operaciones de las entidades fuera de plaza o entidades off shore. Para los efectos de lo establecido en el inciso f) del artículo 113 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, las entidades fuera de plaza o entidades off shore que en el momento de entrar en vigencia este Decreto tengan depósitos en condiciones distintas a las establecidas en el



00000116

Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Comisión de Economía y Comercio Exterior

referido inciso, deberán adecuarlos dentro de un plazo que no exceda de un (1) año o al vencimiento de los mismos, el que sea menor.

ARTÍCULO 27. Bonos emitidos conforme la resolución número JM-172-2007 emitida por la Junta Monetaria. Los bonos cuya emisión fue autorizada con base en la resolución número JM-172-2007 emitida por la Junta Monetaria, así como la forma en que dichas obligaciones sean admisibles para el cálculo del patrimonio computable, conservan su plena vigencia y validez legal.

ARTÍCULO 28. Mayoría calificada. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso de la República.

ARTÍCULO 29. Vigencia. El presente Decreto será publicado en el diario oficial y entrará en vigencia el uno de marzo de dos mil diez.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN, EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL ____ DE ____ DE DOS MIL DIEZ.

José Alejandro AREVALO ALBUREZ
Diputado 2008 - 2012
Congreso República de Guatemala